

Informe "La paz y la protección ambiental en Colombia: propuestas para un desarrollo rural sostenible"

El costo ambiental de la guerra y los retos de la paz

Una mirada a los efectos del conflicto armado en el medio ambiente y los principales desafíos de este Gobierno para mantener los efectos de la paz



Para comprender los costos ambientales de la guerra y los retos a los que se ve avocado este Gobierno en un escenario de posconflicto, Responsabilidad Social y Ambiental de EL NUEVO SIGLO retoma el análisis del periodista, Lorenzo Morales, en su informe "La paz y la protección ambiental en Colombia: Propuestas para un desarrollo rural sostenible".

Será importante identificar los principales efectos del conflicto armado y qué los originó. Según Morales, "uno de los principales efectos del conflicto sobre el medio ambiente ha sido la deforestación (...) primer eslabón en una cadena de efectos negativos que incluye pérdida de biodiversidad, degradación del suelo y aumento de emisiones de gases de efecto invernadero".

Agrega que, "la deforestación ha estado asociada a diferentes factores, entre ellos el desplazamiento, los cultivos de coca y la minería criminal; estos dos últimos renglones son fuente de financiación de grupos insurgentes. Estas economías ilícitas, a su vez, han causado el derrame de sustancias tóxicas que han contaminado suelos y fuentes de agua. La transformación de la hoja de coca en cocaína requiere

del uso intensivo de precursores químicos, en tanto que la explotación de oro requiere de mercurio y cianuro. Además, los ataques contra la infraestructura petrolera, especialmente oleoductos, han causado el derrame de miles de barriles de crudo".

Continúa considerando que, "una de las paradojas de Colombia es que, así como la guerra ha tenido un impacto negativo sobre el medio ambiente, también es evidente que permitió la conservación de vastos territorios que estuvieron vedados no solo al Estado sino a proyectos industriales, de infraestructura o a la posibilidad de formación de asentamientos humanos".

Se extiende acotando que "esta conservación se hizo a veces de manera espontánea, por la imposibilidad de acceder a territorios controlados por las guerrillas, (...) En algunas zonas, los grupos armados imponen restricciones a la caza o la pesca o incluso castigan la tala de madera, el desvío de fuentes de agua y el comercio de fauna silvestre. (...) también defendieron bosques y otros ecosistemas en la medida en que les eran útiles para establecer corredores de movilidad, retaguardias clandestinas y, en general, una ventaja militar en la

guerra de guerrillas. Esta actitud defensiva explica, entre otras razones, el uso masivo de minas antipersonal".

Teniendo de precedente este panorama, Lorenzo Morales sentencia que, "la inserción en una economía lícita pasa por la activación de nuevos sectores económicos en zonas que es-

tuvieron vedadas por la guerra. El gobierno tendrá que crear capacidad institucional nacional y local para anticiparse y fijar reglas del juego que promuevan riqueza y empleo, pero también la protección de ecosistemas frágiles".

Deberá tener como punto de partida los tres principales factores de riesgo asociados al

posconflicto: "los conflictos sobre usos y ocupación del suelo, el desembarco de nuevos actores económicos y la reintegración de combatientes a nuevas actividades económicas". Advertencias sobre las que el Gobierno deberá fijar sus objetivos interinstitucionales en pro de mantener los efectos de la paz con las Farc.



Por cada año de paz, Colombia ahorraría **\$7,1 billones** en degradación ambiental



Entre 1990 y 2013, el 58% de la deforestación ocurrió en municipios de conflicto.



3 millones de hectáreas de bosque

se han deforestado en municipios de conflicto: igual al área de Bélgica.

1.300 millones

de toneladas de CO2 emitidas: el 13% de las emisiones de China



1,5 millones de hectáreas

de suelo degradadas tomarán, al menos, **20 años** en recuperarse.



de las fuentes hídricas del país están potencialmente afectadas por extracción ilícita de minerales y derrames de petróleo: el mismo cauce del río Nilo.

780 mil hectáreas

deforestadas tienen un uso actual diferente al de su vocación



de los cultivos ilícitos se encuentra en municipios de conflicto.

4,1 millones

de barriles de petróleo derramados en los últimos 35 años: equivalente a 16 veces la catástrofe de Exxon Valdez.



Los 757 mil barriles

derramados entre 2009 y 2013 afectan el agua y el suelo de 129 municipios



de la producción de oro nacional proviene de extracción ilícita de minerales, caracterizada por el uso de mercurio. Colombia es el segundo país que más toneladas de mercurio libera, después de China.